

San Borja, 29 de Noviembre de 2019

VISTO:

El expediente N° SCDG-D20190005993, sobre Recurso de Apelación, presentado por el administrado Henry Abanto Alva, contra el acto administrativo que lo sanciona con amonestación escrita, quien solicita se declare la nulidad del procedimiento administrativo hasta la etapa instructiva, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece: “La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.”;

Que, el Artículo 115° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, señala: *“La resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha resolución debe encontrarse motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida. Si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, también deberá disponer la reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en caso se le hubiera aplicado alguna medida provisional. El acto que pone fin al procedimiento disciplinario en primera instancia debe contener, al menos: a) La referencia a la falta incurrida, lo cual incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión su responsabilidad respecto de la falta que se estime cometida. b) La sanción impuesta. c) El plazo para impugnar. d) La autoridad que resuelve el recurso de apelación.”;*

Que, el Artículo 119° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, señala: “El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna quien eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para su remisión al Tribunal del Servicio Civil, según corresponda. La apelación no tiene efecto suspensivo.”

Que, el Artículo 115, numeral 115.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que establece *“Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.”;*

Que, el numeral 115.2, y 115.3, del mismo cuerpo normativo, que señala: *“El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia, y que éste derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.”;*

Que, además el Numeral 218.1, del mismo dispositivo regula que “Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” ;

Que, con Informe N° 27-2019-ST-UAD-INSNSB, la Secretaría Técnica de PAD del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, recomienda elevar todo lo actuado al Titular de la Entidad, en su condición de superior jerárquico, para que resuelva el recurso de apelación.;

Que, con Informe N° 216-2019-UAD-INSNSB, la Unidad de Administración, remite el Informe N° 27-2019-ST-UAD-INSNSB, a la Dirección General, a fin de que se sirva resolver el recurso de apelación;

Que, con Memorando N° 469-2019-DG-INSN-SB, la Dirección General remite a la Unidad de Asesoría Legal, el Informe N° 216-2019-UAD-INSNSB, sobre recurso de apelación, contra la imposición de la sanción de amonestación escrita, a fin de que en el ámbito de su competencia emita opinión legal y de corresponder el acto resolutorio;

Que, con cargo de Notificación N° 013-2018-UAD-ERH-SST-INSN-SB (folios 238), el 10 de setiembre de 2018 se le notificó al ex servidor Henry Frank Abanto Alva, la Carta N° 529-2018-UA/INSN-SB (folios 226 a 236), mediante el cual se le instauró procedimiento administrativo disciplinario, en su condición de Secretario Técnico del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja (INSN-SB), imputándole haber omitido realizar sus funciones en el marco de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada y modificada por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y N° 092-2016-SERVIR-PE, específicamente, los previstos en el literales e) y f) del numeral 8.2, de la citada Directiva; y recaído en los expedientes administrativos-disciplinarios N°s 16-19179-10-08-ST, 16-001344-01-17-ST, 16-018617-004-29-ST, 16-009359-001-46-ST, 16-04404-10-11-ST, 16-008902-001-15-ST y 16-006626-001-50-ST, en los cuales se encontraban presuntamente involucrados los servidores: Ingrid Cano Cueva y Miriam Herrera Estela, Josefina Bertha Charca Pineda, Yanet de Jesús Dios Benites, Edgar Daniel Valdivia Aguayo, Augusto Manuel Vásquez Carrasco y Yaneth Huari, entre otros, los cuales fueron declarados prescritos;

Que, con escrito s/n y recepcionado el 17 de setiembre de 2018 (folios 242), el administrado solicitó “prórroga de plazo para presentar descargos”;

Que, el 24 de setiembre de 2018, el administrado formuló sus descargos (folios 245 a 253), y señaló como domicilio real y procesal, la Calle Costa Rica N° 239 – Urb. Torres Araujo – Trujillo, además de haber solicitado que se le conceda el uso de la palabra para informar oralmente;

Que, el 02 y 03 de octubre de 2018 (folios 275, y folios 278 y 296), la Unidad de Administración y la Secretaría Técnica de PAD del INSN-SB, respectivamente, recibieron los Expedientes Administrativos N°s 18-024320-001, 18-024331-001, 18-024330-001, 18-024332-001, 18-024333-001, 18-024319-001, y 18-024316-001, con el asunto “Interpongo Recurso de Reconsideración – Henry Abanto Alva – Resolución Directoral”, contra las Resoluciones Directorales N°s 0052, 055, 056 (según se verifica de folios 273 a 274, folios 276 a 277, y folios 294 a 295). Cabe precisar que el administrado en sus respectivos Recursos Impugnatorios señaló como domicilio en la Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo;

Que, con Carta N° 911-2018-UAD-SB, del 29 de noviembre de 2018, y notificada al administrado el 07 de diciembre de 2018 (folios 336), mediante el cual, se le fijó fecha y hora para que rinda su informe oral, notificación que fuera realizada en Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo, y comprendida con el señor Isacc Abanto Arias, con DNI N°

17852918, en su condición de “padre del administrado”, identidad corroborada en la Ficha Reniec (folio 554);

Que, a las 09:30 horas, del día 20 y 21 de diciembre de 2018, el M.C. Hersey Barriga Cárdenas, Director Ejecutivo de la Unidad de Administración del INSN-SB (folios 373 y 374), en su condición de Órgano Sancionador de PAD, deja constancia que el administrado no se presentó a rendir su informe oral;

Que, el 22 de agosto de 2019, el Órgano Sancionador emitió la Resolución Administrativa N° 313-2019-UAD-INSNSB (folios 518 a 545), mediante el cual, se resolvió imponer la sanción de Amonestación Escrita al ex servidor Henry Frank Abanto Alva, el mismo que le fuera debidamente notificado el 04 de setiembre de 2019 (folio 552), en la dirección Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo, diligencia que se comprendió con quien señaló ser la “inquilina del administrado”, doña Bertha Alva De La Cruz, con DNI N° 17903141, y según su Ficha Reniec se advierte que su nombre correcto es “Bertha Josefina Alva de Abanto”, aparentemente “madre del administrado”;

Que, es necesario absolver cada uno de los argumentos planteados en el escrito de Apelación, contra el acto administrativo que sanciona al administrado Henry Abanto Alva, con amonestación escrita, quien solicita se declare la nulidad del procedimiento administrativo hasta la etapa instructiva;

Que, con fecha 17 de setiembre de 2018, el administrado presentó su Recurso Administrativo de Apelación contra la recurrida que resolvió imponerle la sanción disciplinaria de Amonestación Escrita, bajo los siguientes términos;

Petitorio:

“Habiendo tomando conocimiento extraoficial el día 16 de setiembre de 2019 de la existencia de un acto administrativo que me impone sanción disciplinaria de amonestación escrita y encontrándome dentro del término de ley, interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra dicho acto administrativo que resuelve imponerme sanción de amonestación escrita, solicitando se declare la nulidad de procedimiento administrativo disciplinario tramitado en el Expediente Principal N° 18-021391-002, hasta la etapa instructiva, por todos los vicios trascendentes e invalorable generados en el presente PAD, por la autoridad instructora y sancionadora del INSN-SB, que han afectado gravemente mi derecho fundamental al debido procedimiento administrativo (derecho de defensa)...”;

Agravios:

- 1. “...debió haber admitido y actuado todos los medios probatorios de descargo ofrecidos en el citado documento (...)”;*
- 2. “...No se me ha notificado debidamente la admisión ni la actuación de éstos (nueve medios probatorios: dos testimoniales y siete (pruebas documentales) desde setiembre de 2018 hasta la presente fecha (...)”;*
- 3. “...He tomado conocimiento extraoficial por primera vez de la decisión del órgano instructor y sancionador del PAD de imponerle sanción de administración escrita (...) situación que impide cuestionar los fundamentos de hecho y derecho que conllevaron a la determinación de existencia de responsabilidad disciplinaria y, por ende, la imposición de la sanción de amonestación escrita (...)”;*
- 4. “...Con la expedición de la resolución impugnada se ha consumado un acto ilegal y arbitrario contra el recurrente, toda vez que el órgano instructor y sancionador del PAD ha vulnerado flagrantemente mi derecho al debido procedimiento en su manifestación del derecho de defensa, toda vez que nunca se me ha concedido la oportunidad de informar oralmente (...)”;*

Que, de acuerdo con el artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que establece, la potestad sancionadora de todas las entidades públicas está regida por los principios especiales de Legalidad, Debido Procedimiento, Razonabilidad, Tipicidad, Irretroactividad, Concurso Continuación de Infracciones, Causalidad, Presunción de Licitud, Culpabilidad y Non bis in ídem. De esta forma, de acuerdo con el numeral 4) del mencionado artículo, *"Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía (...)"*;

Que, la observancia del Principio del Debido Procedimiento, importa que las infracciones son sancionadas con sujeción a los procedimientos establecidos en dicha norma, respetándose las garantías y derechos del debido procedimiento; que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden el derecho a la defensa; los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten, lo que tiene un sustento constitucional en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que prevé la observancia del debido proceso;

Que, con relación al Principio del Debido Proceso en sede administrativa, el Tribunal en la Sentencia del 17 de febrero del 2015, recaída en el expediente N° 4289-2004-AA/TC, expresó en los fundamentos 2 y 3, respectivamente, que: "(...) el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. ..."; y que: "El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)";

Que, con relación al Primer Agravio, el administrado refiriéndose a su escrito de descargo presentado el día 24 de setiembre de 2018 (folios 245 a 253), señaló que: *"...debió haber admitido y actuados todos los medios probatorios de descargo ofrecidos en el citado documento (...)"*;

Que, al respecto, cabe precisar que el derecho a la prueba en los procedimientos administrativos tiene gran relevancia, por lo que el inobservarlas vulnera el debido procedimiento; así tenemos: "(...) el derecho a la prueba se verá afectado allí donde la actuación de un medio probatorio sea realizada de una manera defectuosa, arbitraria o irregular, que lo tornen ineficaz para poder producir prueba. Tal afectación, de producir un agravio real o efectivo para la solución justa del caso concreto (...) puede dar lugar a la nulidad de dicha actuación (...), a fin de que sea realizada correctamente, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar"; de allí que de restringirse su actuación develaría una afectación al Derecho de Defensa de quien ofrece dicho elemento probatorio;

Que, aunado a lo antes expresado, se debe indicar que el numeral 174.1 del artículo 174° del TUO de la Ley N° 27444, prevé que la actuación probatoria se produce: "Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni

mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios”;

Que, efectivamente, el administrado solicitó en su escrito de descargo se practique dos (02) declaraciones testimoniales y siete (07) pruebas documentales, de los cuales se verifica que -todos- tienen como justificación el acreditar la sobrecarga laboral que afrontaba la Unidad de Asesoría Jurídica y la Secretaría Técnica de PAD -durante el periodo que sucedieron los hechos materia de la presente investigación-, y en el cual, el administrado tenía el deber y la responsabilidad de cumplir diligentemente ambas funciones; situación o controversia que no es materia de cuestionamiento en el presente PAD, lo que fue valorado al momento de imponerle la sanción de Amonestación Escrita, respecto a la omisión de funciones incurrida en su condición de Secretario Técnico de PAD, habiendo acarreado que se declaren “prescritos” un total de siete (07) expedientes administrativos;

Que, de lo antes expuesto, se aprecia que la actuación probatoria de la totalidad de los medios probatorios ofrecidos resultaba innecesaria y hasta improcedente, ya que como se mencionó en el párrafo precedente, no guarda relación con los hechos materia del presente PAD y de ninguna manera podría eximirle de responsabilidad administrativa, toda vez que resultaba sobreabundante respecto a los medios probatorios que ya habían sido recabados en la etapa de investigación preliminar, los que intentaban acreditar la sobrecarga laboral en la Unidad de Asesoría Jurídica –a donde pertenecía en condición de Abogado– y Secretaría Técnica de PAD –en adición a sus funciones–, hecho que a la luz de la documentación fue inicialmente conocido y posteriormente valorado por el Órgano Instructor y Sancionador del presente PAD para proporcionalmente aplicarle la referida sanción administrativa, y que de ninguna manera constituiría causal de eximente de responsabilidad administrativa-disciplinaria al administrado;

Que, el artículo 176° del TUO de la Ley N° 27444, prevé que en relación de los hechos no sujetos a actuación probatoria: “Hechos no sujetos a actuación probatoria No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior”. Al respecto, las pruebas ofrecidas por el administrado se encontraban relacionadas a probar hechos ciertos y públicos, ya que en la data de la institución es posible verificar lo siguiente:

- El administrado laboró como Abogado Especialista en Derecho Laboral de la Unidad de Asesoría Jurídica (01.09.2015 al 31.08.2017) y Secretario Técnico de PAD (24.08.2016 al 31.08.2017), según consta del Certificado de Trabajo N° 077-2017 (folios 493), y conforme se desprende del Memorando N° 072-2016-UAJ-INSN-SAN BORJA del 31 de marzo de 2016 (folio 462) y la Resolución Directoral N° 121/2016/INSN-SB/T del 24 de agosto de 2016 (folio 465), siendo esta última, la publicada en el portal institucional.
- La asistencia y permanencia del administrado, se encuentra acreditada con su récord asistencial del 24.08.2016 al 31.08.2018 (folios 494 a 500).
- La carga laboral de los entes del sector público, es de conocimiento público.

Que, en este orden de ideas, se advierte que la actuación de la totalidad de los medios probatorios ofrecidos por el administrado, resultaba innecesaria, por ser sobreabundantes a los hechos probados, y que no guardan relación directa con el hecho imputado; sin perjuicio de ello, se recabó la mayoría de medios probatorios en salvaguarda del Derecho de Defensa del Administrado y el Debido Procedimiento.

Que, con relación al Segundo Agravio, el administrado refiriéndose a su escrito de descargo presentado el 24 de setiembre de 2018 (folios 245 a 253), señaló que: “No se me ha notificado debidamente la admisión ni la actuación de éstos (nueve medios probatorios): dos

testimoniales y siete (pruebas documentales) desde setiembre de 2018 hasta la presente fecha (...)"

Que, en tal sentido, en el extremo de la presunta falta de notificación de la actuación de los elementos probatorios ofrecidos por el administrado, se debe precisar que el artículo 176° del TUO de la Ley N° 27444, señala que no son sujetos de actuación los hechos públicos - ciertos- que consten en Entidad, y además que éstos se encuentran sujetos a la Presunción de Veracidad;

Que, por otro lado, según el artículo 175° del TUO de la Ley N° 27444, en relación a la omisión de actuación probatoria, prevé: "Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución"; y estando a que los hechos indicados por el administrado en su escrito de descargo, intentaron probar algo de lo que la administración tenía conocimiento por ser "hechos probados", en razón de ser ciertos y públicos; en consecuencia, no existía necesidad de notificar la actuación de los elementos probatorios al administrado, máxime que, las reglas que rigen el procedimiento administrativo-disciplinario, no prevé la notificación de la actuación de los medios probatorios, pues de ser así, en todos los casos en el que un administrado ofrezca medios probatorios, los Órganos Instructor y Sancionador del PAD estarían en la obligación de notificar al interesado la actuación de éstos, situación que no acoge el marco jurídico de los PAD;

Que, aunado a ello, se debe considerar que el PAD tiene como finalidad, el establecer o descartar la responsabilidad administrativa-disciplinaria del administrado en base a la valoración de las pruebas, es el caso que el artículo 113° del Reglamento de la Ley Servir que prevé con relación a la actividad probatoria, que: "Los órganos que conducen el procedimiento administrativo disciplinario ordenan la práctica de las diligencias necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, la actuación de las pruebas que puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de responsabilidades. La entidad se encuentra obligada a colaborar con los órganos encargados de conducir el procedimiento, facilitándoles los antecedentes y la información que soliciten, así como los recursos que precisen para el desarrollo de sus actuaciones"; de donde no se aprecia, la exigencia de señalar fecha y hora para llevar a cabo la actuación de la prueba –para ser notificada al administrado-; por lo que, el emitir una sanción administrativa exige que las autoridades del PAD cuenten con los suficientes medios probatorios que les genere certeza y convicción respecto a la comisión de la falta imputada al administrado;

Que, con relación al Tercer Agravio, el administrado señaló que: "He tomado conocimiento extraoficialmente por primera vez de la decisión del órgano instructor y sancionador del PAD de imponerle sanción de administración escrita (...) situación que e impide cuestionar los fundamentos de hecho y derecho que conllevaron a la determinación de existencia de responsabilidad disciplinaria y, por ende, la imposición de la sanción de amonestación escrita (...)";

Que, cabe indicar que el administrado fue debidamente notificado el 04 de setiembre de 2019 (folio 552) con la Resolución Administrativa N° 313-2019-UAD-INSNSB del 22 de agosto de 2019, en Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo, diligencia que se entendió con doña Bertha Alva De La Cruz con DNI N° 17903141, quien señaló ser la "inquilina del administrado", pero de la revisión de su Ficha Reniec, se verificó que su nombre correcto es "Bertha Josefina Alva de Abanto", madre del administrado. No obstante, en el ítem "Nombre de la madre" de la referida Ficha Reniec (folios 550) y en los datos personales de la Ficha Social (folios 447 a 448) obrante en su Legajo Personal de la institución, se aprecia que el administrado registró como su madre a doña "Bertha Josefina Alva De La Cruz"; por lo que se acredita que la madre del administrado recibió el acto administrativo ahora impugnado;

Que, ahora bien, cabe aclarar que el administrado a pesar que niega haber sido notificado con la resolución que ahora impugna, a la luz de la documentación que obra en el expediente

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

administrativo se verifica que se encuentra debidamente notificado, en atención a que conforme lo prevé el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en cuanto a la Notificación Personal:

"21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

(...)

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

(...)"

Conforme a la normativa glosada, la notificación personal debe realizarse en el domicilio que conste en el expediente administrativo o en el último domicilio que el administrado señaló en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

Que, al respecto, se verifica que a lo largo del presente procedimiento el administrado ha fijado y variado su domicilio en varias oportunidades; sin embargo, para efectos de notificación de la resolución materia de cuestionamiento, realizado el día 04 de setiembre de 2019, se tuvo en cuenta el último domicilio consignado por el administrado en otro procedimiento administrativo dentro de la entidad, el ubicado en la Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo - Trujillo, el cual ha sido fijado por el administrado en sus Recursos de Reconsideración (folios 270 a 297) presentado el 01 de octubre de 2018 en contra de las Resoluciones Directorales N° 0052, 055, 056 (según se verifica de folios 273 a 274, folios 276 a 277, y folios 294 a 295) que declararon la prescripción de la potestad sancionatoria del INSN-SB; hecho por el cual se determinó responsabilidad administrativa- disciplinaria en el presente caso; cabe agregar que el administrado señaló su último domicilio (01 de octubre de 2018) y a la fecha de la ahora cuestionada resolución (04 de setiembre de 2019), no ha transcurrido un (01) año;

Que, por otro lado, prosiguiendo con el análisis de la eficacia de la notificación personal, en concordancia con el numeral 21.4 del TUO de la Ley N° 27444, pese a no hallarse el administrado en el domicilio consignado, el 04 de setiembre de 2019, la notificación de la resolución materia de cuestionamiento se efectuó en Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo, cuyo acto de notificación se comprendió con doña Bertha Alva De La Cruz, con DNI N° 17903141, quien señaló ser la “inquilina del administrado”, pero que a la luz de la Ficha Reniec del administrado (folio 550) y su Ficha Social obrante en su Legajo Personal en la institución (folios 447 a 448), sería su “señora madre”;

Que, por último, en este extremo de los agravios planteados, se debe precisar que el artículo 27.2 de la Ley N° 27444 y del TUO de la citada Ley, prevé en cuanto al saneamiento de notificación defectuosa: “También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna resolución de la autoridad.”;

Que, en este sentido, se verifica del contenido de su apelación presentado el 17 de setiembre de 2019, que señala textualmente: “...interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra dicho acto administrativo (...), que resuelve imponerme la sanción de amonestación escrita...” (el énfasis es nuestro), de donde claramente se aprecia que el administrado TUVO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDIÓ SANCIONARLO CON LA SANCIÓN DE AMONESTACIÓN ESCRITA; por lo que se infiere

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

que a la luz de la normativa acotada, EL INVESTIGADO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE NOTIFICADO; máxime que el recurso impugnativo fue presentado dentro del plazo de Ley, ya que el 25 de setiembre de 2019, recién vencía el plazo para su impugnación; por lo que, resulta falso el impedimento de conocimiento por parte del administrado de los términos expuestos en la resolución impugnada;

Que, con relación al Cuarto Agravio, el administrado señaló que: *“Con la expedición de la resolución impugnada se ha consumado un acto ilegal y arbitrario contra el recurrente, toda vez que el órgano instructor y sancionador del PAD ha vulnerado flagrantemente mi derecho al debido procedimiento en su manifestación del derecho de defensa, toda vez que nunca se me ha concedido la oportunidad de informar oralmente (...)”*;

Que, al respecto, la expedición de la resolución impugnada obedece a la observancia del debido procedimiento, que si bien el administrado manifestó como agravio la falta de comunicación respecto a la fecha y hora para que realice el uso de la palabra u informe oralmente ante el Órgano Sancionador del PAD; lo cierto es que de acuerdo a lo petitionado por el administrado en su escrito de descargo del 24 de setiembre de 2018, en el cual solicitó informe oral, se advierte que el Órgano Instructor y Sancionador de PAD con fecha 07 de diciembre de 2018 (folio 335) cursó la Carta N° 911-2018-UAD-INSN-SB, donde le concedió el uso de la palabra para las 09:30 horas de los días 20 o 21 de diciembre de 2018, el mismo que ante la ausencia del administrado en el último domicilio consignado en otro procedimiento administrativo ubicado en Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo (folios 273 al 296), se practicó el acto de notificación con el señor Isaac Wenceslao Abanto Arias, con DNI N° 17852918, identificándose como “padre del administrado”; siendo así, pese a estar debidamente notificado el administrado, no concurrió a informar oralmente, de lo que se dejó constancia en las Actas de Diligencia de Informe Oral de fecha 20 y 21 de diciembre de 2018 (folios 374 y 373), hecho que solo obedeció a la voluntad del administrado;

Que, del análisis de los “cuatro agravios” planteados por el administrado, no se aprecia sustento alguno de haberse violado el Derecho a un Debido Procedimiento y Derecho de Defensa en el presente PAD, verificándose que se cumplió con observar las garantías inherentes al procedimiento administrativo-disciplinario, pues se valoró adecuadamente los elementos probatorios que forman parte del expediente administrativo, oportunamente se concedió al administrado el uso de la palabra, se notificó debidamente la concesión de informe oral, y la resolución de imposición de sanción, así como ha obtenido una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, en consecuencia, no se advierte que exista inaplicación o afectación alguna al Principio del Debido Procedimiento en el trámite o desarrollo procedimental conducente a la expedición de la resolución materia de apelación; por lo tanto, se determina que no ha existido vicios en la apelada, ni en el presente procedimiento disciplinario que configuren alguna causal de nulidad establecida en el artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que, no es posible amparar su Recurso de Apelación.

Que, es menester señalar que, en el devenir del procedimiento administrativo disciplinario, el administrado Henry Frank Abanto Alva habría variado su domicilio en dos ocasiones, conforme se señala en el esquema adjunto:

DOMICILIOS FIJADOS, SEÑALADOS Y VARIADOS POR EL ADMINISTRADO HENRRY FRANK ABANTO ALVA				
ÚLTIMO SEÑALADO	INSN- SB	SEGÚN DNI	VARIÓ DOMICILIO	VARIÓ DOMICILIO

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Adenda N° 001-2017 (31/12/2016) y 002-2017 (30/06/2017) - Contrato CAS N° 979-2015	42245848	RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (01/10/2018) - Folios 273 - 296	RECURSO APELACIÓN (17/09/2019) - Materia de Pronunciamiento -
Calle Alfa Centauro N° 169 - Dpto. 101 - Urb. La Calera - Surquillo	Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo	Calle Costa Rica N° 245 – Urb. Torres Araujo – Trujillo	Domicilio Procesal: Calle Costa Rica N° 239 – Urb. Torres Araujo – Trujillo
Debidamente firmado por el administrado - Folios 89 y 90	Debidamente notificado el inicio de PAD - Carta N°529-2018 - (Recibió: HERMANA) - Folio 236	Se Notificó: Concede Informe Oral - (Recibió: PADRE) - Folio 335	A la fecha, es el último domicilio fijado por el administrado.
No surtió efecto: Marianella Vega Huanillo - propietaria dijo no conocer al servidor - Folio 174	Surtió efecto: Presentó su descargo (24.09.2018) - señaló Domicilio Procesal - Folio 253	Se Notificó: R. A. 313-2019-UAD: Sanción (Recibió: MADRE)- Folio 335	

Que, cabe agregar que el administrado indicó como último domicilio Calle Alfa Centauro N° 169 - Dpto. 101 - Urb. La Calera – Surquillo, lo que fue consignado en las dos últimas Adendas al Contrato CAS N° 979-2015, conforme se observa en la Adenda N° 001-2017 (31/12/2016) y 002-2017 (30/06/2017) debidamente suscritos por el administrado, los que obran en el expediente administrativo (folios 89 y 90); sin embargo, con fecha 09 de agosto de 2018, la ciudadana Marianella Vega Huanillo identificado con DNI N° 32736350, presentó un escrito (folio 174) ante la Secretaria Técnica del INSN-SB, en el que refirió “ser la propietaria del inmueble” ubicado en la dirección antes consignada, y es más precisó “no lo conozco y no vive en mi propiedad”, en referencia al administrado; por lo que, la propietaria devolvió el Cargo de Notificación N° 005-2018-UAD-ERH-ST-INSN-SB (folios 170), que contiene la Carta N° 529-2018-INSN-SB del 16 de julio de 2019 y documentos adjuntos, sobre inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el administrado (folio 160 al 169);

Que, por lo expuesto, se evidencia que los fundamentos del recurso de apelación, contiene un cúmulo de argumentos que no son consistentes, y que deben ser resueltos por la entidad mediante Resolución Directoral, en cumplimiento a lo normado por el numeral 195.1 del Artículo 195 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que señala que *“Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto (...)”*;

Qué, mediante Informe Legal N°000252-2019-UAJ-INSNSB, la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda que de conformidad con la normativa aplicable, se declare infundado el

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

recurso de apelación, toda vez que no se observa ningún vicio, dentro del procedimiento administrativo sancionador que genere su nulidad;

Con el visto bueno del Director Adjunto, de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica; y;

De conformidad con de la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, y con la Resolución Ministerial N° 306-2019/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar Infundado el Recurso de Apelación, interpuesto por el administrado Henry Abanto Alva, contra la Resolución Administrativa N° 313-2019-UAD-INSNSB, al no configurarse ninguna causal que genere la nulidad del procedimiento administrativo sancionador.

ARTICULO 2°.- Derivar los actuados a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, a fin de que actúe de acuerdo a sus atribuciones, conforme a la recomendación establecida en el Informe N° 27-2019-ST-UAD-INSNSB, expedido por Secretaria Técnica del INSN-SB.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER se realice la publicación de la presente Resolución en la página web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO

Director General(e)

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

RAZR/EDVH

Distribución:

- () Dirección Adjunta
- () Unidad de Asesoría Jurídica
- () UTI
- () Interesado